AMBIEN-TICO

Revista mensual del proyecto Actualidad Ambiental en Costa Rica

Coordinación: Eduardo Mora · Montaje: Cecilia Redondo · Circulación: Enrique Arguedas

Escuela de Ciencias Ambientales · Universidad Nacional · Costa Rica

Apartado postal: 86-3000 · ambienti@samara.una.ac.cr · <http://www.una.ac.cr/ambi/amb.html>

SUMARIO

Cambio climático y proyectos de implementación conjunta. ASOCIACIÓN ECOLOGISTA COSTARRICENSE –AMIGOS DE LA TIERRA	1
La agenda de Costa Rica para las negociaciones sobre cambio climático en Kyoto. ALBERTO SCHRAM	6
El sector forestal como potencial eje de desarrollo. OLMAN SEGURA	10
La diversidad (biológica, cultural) convertida en la sal de la vida. EDUARDO MORA	13

Cambio climático y proyectos de implementación conjunta

ASOCIACIÓN ECOLOGISTA COSTARRICENSE-AMIGOS DE LA TIERRA

Sobre la problemática del cambio climático

El problema del cambio en el clima del planeta, debido a la intervención humana, es, sin duda, uno de los síntomas más claros de la insustentabilidad del modelo económico y social imperante. Al referirnos a una de las diversas propuestas -en este caso al recurso del mecanismo de la implementación conjunta y los instrumentos de mercados- para mitigar o solventar el problema, no debemos perder de vista "el carácter de totalidad de la realidad" (Mora, 1996). Esto es, no debemos perder de vista la globalidad del problema, tratando de obtener algunas "ventajas comparativas" a la hora de afrontarlo.

El problema del calentamiento de la atmósfera (calentamiento global, cambio climático, efecto invernadero) tiene causas y responsables concretos: el nivel excesivo de emisiones atmosféricas -actuales y pasadas- de CO₂ por parte de ocho países: Estados Unidos, Canadá, Rusia, Alemania, Reino Unido, Japón, Italia y Francia (orden según emisiones de CO₂ per capita, según Friends of the Earth (1997), los cuales son responsables de casi un 50% de las emisiones, a pesar de tener en conjunto tan sólo un 12.2% de la población mundial. No olvidamos tampoco la gran responsabilidad que tendrá

próximamente China en cuanto a emisiones de CO₂.

El cambio climático presenta también manifestaciones muy concretas: sequías, inundaciones, huracanes más fuertes, incremento del nivel de los océanos debido al descongelamiento de los casquetes polares, entre otros, cuyos impactos recaen ante todo en los países y segmentos de la población más disminuidos socio-económicamente.

Como lo habíamos manifestado anteriormente (Asociación Ecologista Costarricense-Amigos de la Tierra 1997) el enfoque integral con el que debe ser asumido el problema de las emisiones -y los consecuentes intentos de búsqueda de soluciones- lleva ineludiblemente al señalamiento del modelo de desarrollo imperante como su razón estructural.

Esto debe hacernos ver que, aunque se tomen algunas medidas locales, en caso de no haber un cambio radical en las pautas de producción de emisiones a nivel mundial, poco significarán esas medidas a nivel macro, no sólo desde la perspectiva de la economía ecológica sino también de la neoclásica. Dicho de otra forma: de nada nos valdrá tener un poco más de bosque si el impacto global del cambio climático hace que tengamos cada vez cosechas más pobres, huracanes más fuertes y una creciente inundación de las zonas bajas.

Para la Federación Mundial Ecologista Amigos de la Tierra Internacional, a la cual pertenecemos y cuyos puntos de vista compartimos, ningún progreso sustancial ha sido hecho en dirección de

un acuerdo internacional efectivo para prevenir el cambio climático. La reunión de octubre en Bonn y las declaraciones del presidente de los Estados Unidos William Clinton el 22 de octubre son un buen ejemplo de ello.

Consideramos que la responsabilidad principal recae tanto en el gobierno de Estados Unidos como en el de Japón, principales responsables del fracaso de las negociaciones en curso, sin olvidar la de todos aquellos países exentos de una política integral para combatir el problema.

La posición de los países que se niegan a asumir un compromiso con respecto a la reducción de emisiones pareciera ser la de las grandes corporaciones multinacionales del petróleo y del

automóvil, que llevan a cabo campañas multimillonarias para evitar que medidas vinculantes sean aceptadas en Kyoto, en diciembre de este año.

Nuestra posición es la de apoyar la propuesta del Protocolo de la Alianza de Pequeños Países Insulares, que demanda una reducción del 20% en emisiones al año 2005 (en relación a las emisiones de 1990), como primer paso.

Acerca de los instrumentos financieros y de la implementación conjunta para la mitigación de gases de efecto invernadero

Los instrumentos financieros y la implementación conjunta han sido recomendados como una posible política internacional para reducir las emisiones de CO₂.

Por instrumentos financieros entendemos los permisos comercializables como acciones y bonos emitidos hacia las compañías, cuyos dueños tienen la posibilidad de usar o comercializar para continuar emitiendo CO₂, sin que necesariamente se tengan que comprometer a reducir sus emisiones. Teóricamente es posible incluir un decrecimiento anual en los niveles permitidos de emisiones en los permisos.

Los permisos comercializables de emisiones ejemplifican la actual preocupación de hacer frente a los problemas ambientales con soluciones de mercado. En teoría, se supone que los instrumentos de mercado son más flexibles, tienen menores costos administrativos y su implementación se asume será casi automática.

Sin embargo, el que ello vaya o no a suceder es dudoso. En general, consideramos que los países más contaminantes desean que estos instrumentos, basados en el mercado, sean aprobados antes de discutir las metas de reducción de CO₂ en las negociaciones en curso en torno al problema de cambio climático y los ven como útiles para destruir otro tipo de regulación basada en los impuestos por emisión de CO₂, sin tener que comprometerse a metas concretas de reducción.

El único sistema de permisos comercializables actualmente en uso es el de emisiones de azufre en Estados Unidos.

Sin embargo, la Unión Europea ha alcanzado, actualmente, niveles mucho mayores de reducción de emisiones de CO₂ a través de medidas regulatorias que los Estados Unidos a través de dichos permisos.

Por implementación conjunta entendemos un mecanismo que permite a los países ricos del norte el reemplazo de tecnologías superadas por otras más modernas en los países más pobres, contribuyendo al mismo tiempo a reducir el nivel de emisiones en esos países. De esta forma, y también por medio de la inversión en proyectos, como la siembra de árboles para aumentar los sumideros de carbono o la conservación de los bosques y otros sumideros en los países pobres, los países ricos pueden recibir créditos en sus cuotas de emisiones.

Consideramos que la introducción de incentivos basados en las fuerzas del mercado lo que hará será retardar avances más radicales. Al mismo tiempo, se reducirán las posibilidades para los ciudadanos y las organizaciones ambientalistas para influenciar a los políticos nacionales y extranjeros; el mercado tomará el control.

El principio de equidad global enuncia que todos los seres humanos tienen el mismo derecho a usar una cantidad equivalente de recursos y a producir una cantidad equivalente de contaminación dentro de los límites per capita permitidos por el espacio ambiental. Bajo la lógica de los instrumentos financieros y de la implementación conjunta, las diferencias en el consumo y contaminación per capita serán mantenidas o incrementadas.

Ante todo, los países ricos y las élites dominantes de los países pobres debieran reducir su propio uso de los recursos y sus niveles de contaminación y no buscar alternativas con las cuales eludir sus obligaciones y maquillar sus indicadores nacionales de uso de recursos y costos por la contaminación.

Los países industrializados deben asumir obligaciones en relación a su participación en la contaminación global y no buscar un sistema de repagos, el cual es visto por los países no industrializados como una nueva y humillante forma de "ayuda".

Los países del sur podrían perder también su soberanía sobre los territorios donde los proyectos

de implementación conjunta se desarrollasen, por ende perderían también su soberanía sobre sus sistemas de producción. Por ejemplo, los países del norte podrían desarrollar plantaciones de árboles en el sur para absorber sus emisiones de CO₂, con los correspondientes impactos que implicaría la eliminación de los bosques nativos para la expansión de plantaciones de árboles.

La existencia de mecanismos de mercado presupone la existencia de un mercado que funcione bien y equitativamente. Su implementación podría conducir a una adquisición continua de los permisos de los países del sur por los países del norte. Esto iría en contra del principio de la equidad global y mantendría las grandes diferencias actuales en el consumo y contaminación per capita entre norte y sur.

Los permisos comercializables ignoran el hecho que los países ricos deben reducir su propio uso de los recursos y su contaminación. Los políticos y compañías que apoyan dichos instrumentos son los mismos que se oponen a altos niveles de control ambiental y que no desean escuchar acerca de niveles específicos de contaminación permitida. Una vez que los permisos hayan sido emitidos será muy difícil conseguir la reducción de los niveles de emisiones. Se podría crear un clima propicio para los monopolios, haciendo más difícil la sobrevivencia para las empresas más pequeñas o medianas.

Un esquema alternativo.

¿Significa lo anteriormente dicho que los instrumentos de mercado son inaceptables bajo todas las circunstancias? No, si se tomase como punto de partida el principio de equidad.

El sistema actual, que tiene una situación de desigualdad como inicio, legitima una cuota desigual de emisiones. Esta política es moralmente inaceptable y amplifica las desigualdades globales.

Pensando desde una lógica planetaria, creemos que lo que procede es que antes de adoptar dichos instrumentos, claras metas de reducción sean aceptadas de manera vinculante.

En caso de que dichos instrumentos sean aceptados, condiciones específicas deben ser obtenidas. Primeramente, que los permisos sean usados sólo en una escala nacional con el objetivo de alcanzar metas nacionales. Además, los

permisos deberían incluir tanto las metas preliminares como finales según los límites dados por el espacio ambiental. Tercero, el uso de los permisos comercializables no debería ser extendido a todos los recursos globales sino sólo a algunos y deberían ser usados por un espacio de tiempo limitado.

Recomendaciones específicas para aplicar un esquema alternativo en Costa Rica

* Apoyar la implementación conjunta y los instrumentos financieros sólo en caso de una participación democrática y que integre realmente a los pequeños productores. Hasta el momento los pequeños y medianos campesinos no han sido beneficiados.

* El dinero que entra al país debe combinar su apoyo a los sumideros con la conservación de biodiversidad. En ese sentido se debe propiciar la regeneración natural mejorada con la introducción de especies nativas (en especial especies amenazadas o especies en peligro de extinción).

* Además, esos dineros deben apoyar programas que favorezcan un desarrollo rural integral, en especial facilitando procesos donde el campesino y pequeño productor incorpore el bosque dentro de su economía.

* Es necesario hacer un análisis ecosistémico por región que identifique áreas prioritarias y zonas más valiosas. Por ejemplo: los bosques remanentes fuera de las áreas protegidas en Talamanca, Zona Norte y Osa que están en manos de pequeños productores tienen que ser favorecidos también con esos incentivos.

* La administración de esos fondos debe separarse de la administración pública ya que los mecanismos de control y fiscalización son deficientes. En estos momentos, menos de la mitad de los impuestos selectivos al consumo de combustibles están siendo destinados a los fines definidos por la ley de pago de servicios ambientales y estos fondos se aplican a los casos privilegiados por el gobierno.

* Se debe implementar un programa efectivo e integral de combate al cambio climático, que vaya más allá de sus aspectos forestales y que incluya en forma consecuente sus otros aspectos, como los de política energética y de transporte, hasta ahora no tratados a profundidad.

Aspectos legal-financieros de la implementación conjunta

Como parte de la estrategia del gobierno para desarrollar acciones dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se creó la Oficina Costarricense de Implementación Conjunta (OCIC), como resultado de un convenio de cooperación entre los sectores gubernamental, privado y no gubernamental, la cual funciona como una oficina rectora de carácter técnico y ejecutora de las políticas y lineamientos nacionales para la implementación conjunta, y que mediante Decreto Ejecutivo No. 25066-MINAE obtuvo el rango de órgano de desconcentración máxima técnico-administrativa.

La Ley Forestal 7575 establece en su artículo tercero inciso k), que la mitigación de emisiones de gases efecto invernadero es parte de los servicios ambientales que brindan los bosques y las plantaciones forestales, los cuales se pagarán a los propietarios de dichos ecosistemas a través del Certificado para la Conservación del Bosque (CCB), cuyos beneficiarios serán determinados por el MINAE (art. 22 de la Ley Forestal), asimismo este Ministerio definirá las áreas prioritarias a incentivar en las Áreas de Conservación (art.38 del Reglamento de la Ley Forestal)

El Estado captará y ejecutará los fondos para el pago a los propietarios de bosque por los servicios ambientales que estos brindan a través del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), órgano de desconcentración máxima que cuenta con una personería jurídica instrumental, cuya Junta Directiva estará compuesta por dos representantes del sector privado (uno de ellos en nombre de las organizaciones de pequeños y medianos productores forestales) y tres del sector público. El propietario se obliga a entregar por medio de un contrato al FONAFIFO los derechos de reclamo internacional de ese servicio ambiental (CTOS), que deben de ser vendidos por la OCIC.

Hasta el momento se cuenta con un fondo semilla administrado por el FONAFIFO, cuyos recursos provienen del 5% del impuesto selectivo a los combustibles y de los \$2 000 000

que ingresaron de Noruega producto de la venta de 200 000 Tn. de carbono fijado. Sin embargo, el art. 46 de la Ley Forestal contempla la posibilidad de que el cooperante o el donante establezca directamente con los propietarios los mecanismos de financiamiento por concepto de mitigación de emisiones de gases con efecto invernadero.

Actualmente los montos para el pago por concepto de servicios ambientales están definidos de la siguiente manera :

- a. para nuevas plantaciones forestales, la suma de $\$120\,000$ por hectárea.
- b. para manejo de bosques naturales, la suma de $\$10\,000$ por hectárea.
- c. para conservación de bosque natural, la suma de $\$12\,000$ por hectárea.

Consideraciones críticas

La conformación de los entes que definen e implementan las políticas referidas a la implementación conjunta y al pago de servicios ambientales dista mucho de un carácter democrático que permita y promueva la participación de los distintos sectores de la sociedad, tal y como mercadea el Estado sus políticas ambientales a nivel nacional e internacional.

Esto se puede evidenciar en los siguientes aspectos:

- a. la composición de la OCIC: MINAE, Coalición de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE), Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR) y la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE y
- b. la composición de la Junta Directiva de FONAFIFO, indicada anteriormente.

No resulta satisfactorio que se excluya en el primer caso, o no se contemple la participación paritaria en el segundo, de los sectores directamente involucrados o afectados por dichas políticas como lo son el sector de pequeños propietarios de bosque, organizaciones campesinas, comunales y ecologistas.

En este sentido es grave y contraviene todos los principios de participación ciudadana en la conservación, uso y gestión de los recursos ambientales, que sea el MINAE quien determine los beneficiarios de los Certificados de Conservación del Bosque (CCB) y las áreas prioritarias a beneficiarse. Además, nuestro ordenamiento no contempla espacios horizontales y de participación comunal-popular para determinar estos aspectos, los cuales inciden en la posibilidad que deberían tener las comunidades para decidir el manejo de sus recursos ambientales. Por lo tanto, resulta necesaria la configuración de instancias participativas para la toma de decisiones.

En cuanto a los montos establecidos para el pago por concepto de servicios ambientales, no es justificable desde el punto de vista económico y ambiental privilegiar a las plantaciones forestales sobre los bosques naturales. Si bien es cierto que las nuevas plantaciones forestales necesitan una cantidad mayor de dinero para su gestión, la diferencia entre los montos para éstas y los montos para el manejo y conservación de bosques naturales no debe ser tan abismal, ya que esto puede constituirse en un incentivo para la destrucción de estos ecosistemas naturales con el fin de sustituirlos por plantaciones, dado que estas generarían mayores dividendos.

Bibliografía

- Alpizar, William. "Venta de servicios ambientales a través de proyectos de implementación conjunta". En AMBIENTICO, No.53, Escuela de Ciencias Ambientales, Universidad Nacional-Heredia, Agosto, 1997.
- Asociación Ecologista Costarricense-Amigos de la Tierra. "Más allá de las emisiones. Hacia un enfoque integral del problema". En AMBIENTICO, No. 50, Escuela de Ciencias Ambientales, Universidad Nacional-Heredia, Mayo 1997.
- Friends of the Earth International. "The G8 and Climate Change-Time to Set an Example". CLIMATE CHANGE BRIEFING 1. Amsterdam, 1997.
- Mora Alvarado, Minor. "Sostenibilidad económica y principios de lógica holística". En AMBIENTICO No. 46, Escuela de Ciencias Ambientales, Universidad Nacional-Heredia, noviembre 1996.

La agenda de Costa Rica para las negociaciones sobre cambio climático en Kyoto

ALBERTO SCHRAM

Queremos proponer algunas ideas para revitalizar la política ambiental internacional de Costa Rica. Las ideas principales contenidas en este artículo surgieron del debate que tuvo lugar durante la conferencia sobre "La Cumbre de la Tierra 5 Años después: el proceso Rio +5 en Costa Rica", organizada por la *Asociación Costarricense para las Naciones Unidas (ANUCORI)* y el *PNUD*, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica en ocasión de la celebración del día de las Naciones Unidas - el 24 de octubre.

Las negociaciones sobre cambio climático en el período 1992-1997

La conferencia de las Naciones Unidas "Rio +5" que tuvo lugar en Nueva York del 23 al 27 de junio de este año, ha tenido una negativa acogida en la prensa por la aducida falta de resultados concretos. Esta conferencia pretendía hacer un balance de la situación cinco años después de la Cumbre de la Tierra realizada en Rio de Janeiro en 1992 y proponer nuevas metas e iniciativas. Un cambio de posición de los Estados Unidos (EU) ocurrido 3 meses después de "Rio +5" demuestra que un progreso sustancial en este tema es posible. El anuncio de la posición de negociación de los EU el miércoles 22 de octubre pasado para la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático -que tendrá lugar en diciembre en Kyoto (Japón)- demuestra que existe una posibilidad real de llegar próximamente a un

convenio internacional sobre emisiones de CO₂.

Tabla 1: Lo que pasó: emisiones de CO₂ en millones de toneladas

	1990	Proyecciones	
		2000	% cambio 1990-2000
Suiza	44	42	-5
Inglaterra	584	563	-4
Alemania	983	945	-4
Holanda	162	163	1
Dinamarca	53	55	4
Suecia	53	55	4
Bélgica	109	113	4
Noruega	32	45	6
Japón	1,068	1,128	6
Austria	59	65	10
Francia	379	417	10
Italia	408	447	10
EEUU	4,895	5,449	11
Nueva Zelandia	25	28	12
Canadá	432	492	14
Irlandia	33	38	15
Grecia	73	89	22
Australia	265	328	24
Portugal	42	53	26
España	217	273	26
Finlandia	54	69	28
Turquía	138	238	72

Fuente: AIE

Después de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, los países industrializados se comprometieron a estabilizar sus emisiones para el año 2000 en relación con el nivel de 1990. Los países menos desarrollados (PMD) -el llamado grupo G-77 más China- no se comprometieron a metas específicas en forma vinculante. Como podemos ver en la tabla 1, las emisiones de CO₂ de EU y Japón han superado la meta, más que todo por causa del crecimiento económico acelerado después de 1992. La mayoría de los países europeos tampoco ha logrado alcanzar las metas establecidas en Río. Alemania e Inglaterra han respetado sus compromisos no a través de una modernización tecnológica de su aparato productivo, sino por cambios casuales en sus estructuras industriales. Inglaterra cerró varias centrales eléctricas de carbón y Alemania cerró las industrias de la antigua Alemania del Este. Solamente un pequeño país, Suiza, alcanzó la meta. Vale notar que los países tecnológicamente más atrasados como España, Portugal y Grecia, aumentaron sus emisiones aún más que los EU.

Una de las razones de este resultado negativo es que en Río los convenios fueron negociados por los Ministros de Ambiente de los varios países sin consultar con los Ministros de los departamentos económicos. Para los Ministros de Ambiente era muy fácil comprometerse, sabiendo que los demás países tampoco iban a lograr las metas establecidas. Si algo se aprendió de Río es que esta forma de negociar no es adecuada.

EU es el productor principal de CO₂ a escala mundial: con solamente 4% de la población de la tierra produce más de 25% de la cantidad de emisiones de CO₂. Esto está relacionado con el hecho que este país produce también alrededor del 20% de la riqueza mundial. Los EU son y seguirán siendo durante las próximas décadas los mayores emisores de CO₂ y, por lo tanto, una reducción de dichas emisiones en este país tendrá un impacto positivo en el esfuerzo por reducir el calentamiento global.

Considerando este panorama y tomando en cuenta las diferentes posiciones de negociación anunciadas para la Conferencia de Kyoto -véase tabla 2- la posición europea es aparentemente poco realista, visto que no ha sido acompañada por medidas concretas para ayudar las industrias a reducir sus emisiones. La posición del grupo G-77 más China

es aún menos realista y no puede ser considerada como un aporte constructivo a las negociaciones. Japón, como anfitrión de la conferencia de Kyoto, trata de mantener una posición intermedia en términos de cantidades a reducir y al mismo tiempo de mantener el convenio existente de Río y

no obligar a los países menos desarrollados a comprometerse.

La posición oficial de los EU mantiene que ciertos países en vías de desarrollo como China e India

deberán comprometerse también a reducir sus emisiones de CO₂, porque, según las proyecciones, sus emisiones en las siguientes décadas superarán las de los EU. Esta posición fue definida por el Senado de EU, que prohibió al Presidente firmar un convenio en el cual los PMD no se comprometieran. Los EU aducen que el mundo no podrá estabilizar sus emisiones de CO₂ si no hay un acuerdo entre países desarrollados y menos desarrollados. Como dijo el Presidente Bill Clinton en una conferencia de prensa el 6 de octubre de este año:

"Los EU no pueden mantener ni mejorar su propio nivel de bienestar hasta que los PMD no crezcan rápidamente. Nosotros apoyamos esto. Ellos pueden escoger un diferente futuro energético y esto tiene que ser parte de este (convenio). Sin embargo esto no es una excusa para que no hagamos nada, pues todo lo que hagamos será para nuestro bienestar y el resto del mundo." (fuente:

http://www.whitehouse.gov, traducción A.S.)

El pasado 22 de octubre el Presidente Bill Clinton anunció la creación de un fondo de \$5.000 millones para ayudar a la industria estadounidense a reducir sus emisiones. También anunció que los EU usarán el mecanismo de permisos de emisión para alcanzar una reducción, el cual podrá ser ampliado a nivel mundial. Varios industriales comentaron que este plan era demasiado exigente, mientras que para ciertos ambientalistas la propuesta no tiene suficiente alcance. A pesar de la gran variedad de reacciones, es cierto que con esta posición los EU van a tener un papel principal en las negociaciones, y no, como se temía antes, un papel marginal.

Tabla 2 Lo que podría pasar: niveles de reducción de emisiones de CO₂ propuestos para Kyoto

	1990	2010	2020
Unión Europea	100	85	?
Estados Unidos	100	100	90?
Japón	100	95	?
G-77 + China	100	85	65

La propuesta de EU ha contado con el apoyo de representantes de varios países no industrializados, como por ejemplo Bakary Kante el delegado de Senegal en Nueva York, quien admitió:

"Para ser justo, ciertos países menos desarrollados deberían comprometerse, pero se rehúsan a ello pues va más allá de lo que ya han acordado" (Fuente: <http://www.washingtonpost.com>; traducción A.S.)

Por otra parte, ciertos países del G-77 como, por ejemplo, Argentina y México ya han anunciado que están dispuestos a comprometerse a metas de reducción de CO₂.

En suma, quedó claro que la situación no es tan sencilla como para sostener que el país que emite más debe reducir en un más alto porcentaje sus emisiones -en este caso EU-, o como para afirmar que ninguno de los PMD tiene que comprometerse a hacer un esfuerzo para reducir emisiones de CO₂. Ningún país tiene razones para estar complacido con la actual situación de emisiones. En mi opinión, la posición de EU es más seria que la posición de los países europeos o la del grupo G-77 más China, y por consecuencia es bastante probable que los EU jueguen un papel importante en las negociaciones. La voluntad de Argentina y México de comprometerse a metas de emisión es laudable, pero en mi criterio los PMD deberían pedir como pago por esta concesión, primero, un esfuerzo por parte de los países industrializados de transferencia de tecnología hacia sus economías y, segundo, el derecho de participar en la formulación de un sistema de permisos comerciables para emisiones de CO₂. Anunciar *ex-ante* el quererse vincular a metas específicas como lo hicieron,

entre otros, Argentina y México, demuestra una falta de autonomía por parte de los políticos en la representación de los verdaderos intereses de cada uno de sus pueblos.

¿Un nuevo papel para Costa Rica?

Costa Rica ha participado en todas las conferencias organizadas por las Naciones Unidas sobre ambiente, y es el primer país en el mundo en "vender" fijación de CO₂ a Noruega y Holanda mediante proyectos de reforestación en su territorio -a través del mecanismo llamado implementación conjunta-. Además Costa Rica, como actual miembro del Consejo de Seguridad, y habiendo tenido la presidencia en el año 1996 del grupo de países en vías de desarrollo -el G-77 más China- es un país que tiene suficientes contactos en el seno de las Naciones Unidas para organizar cierta presión política.

Sin embargo, el rumbo que han tomado las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre las metas para la reducción en CO₂ tiene un riesgo para Costa Rica, pues no cuenta con la presencia en su territorio de industria pesada y por lo tanto no tiene grandes obstáculos para comprometerse a metas específicas de reducción de CO₂. Los temas de mayor transcendencia, que ahora parecen terminar bajo la mesa de negociación son, primero, la transferencia de tecnología para que los procesos de producción sean más eficientes y limpios y, segundo, la creación de un mercado internacional formal de permisos comerciables de emisión de CO₂. Estos son los dos temas que pueden traer más beneficios al país por lo que Jonathan Wiener de Resources for the Future ha pronosticado que los flujos de capital y tecnología generados por un similar mercado en unos años podrían superar todos los flujos existentes de ayuda internacional oficial.

Si los políticos y los representantes de Costa Rica, a pesar del calor de la campaña política, se pudieran poner de acuerdo sobre una estrategia a seguir en Kyoto, tal vez se podría llegar a un convenio que represente los verdaderos intereses del país. Otra ventaja que tiene el gobierno de Costa Rica en sus relaciones con importantes asesores como el Profesor Henk Folmer, especialista internacional en Economía Ambiental, quien ha publicado varios libros sobre las estrategias para países

en vías de desarrollo a seguir en conferencias internacionales relacionadas con el ambiente¹.

Aunque Costa Rica forma parte del grupo G-77 más China, los intereses reales del país no calzan con la mayoría de los países de este grupo. Costa Rica debería cambiar el énfasis de las negociaciones de metas cuantitativas para la reducción hacia temas más vinculados con su realidad como la transferencia de tecnología y los permisos negociables para emitir CO₂. Los sectores más interesados en recibir este nuevo tipo de ayuda internacional serían el sector forestal, la industria, el transporte, la generación eléctrica y los usos alternativos de energía, como por ejemplo el uso de

biomasa. Es hora de formular una política ambiental coherente a nivel nacional e internacional y dejar de ser clientes de productos intelectuales del Norte o del Sur. Estoy convencido que una contribución a las negociaciones en este sentido será bien recibida y llevará a otro éxito de política exterior costarricense.

ALBERTO SCHRAM, es economista ambiental y coordinador del Comité de Desarrollo Sostenible de ANUCORI

¹Véase: Henk Folmer y A. de Zeeuw, *Game Theory and Environmental Economics Handbook of Environmental Economics*, 1997; *The International Yearbook of Environmental and Resource Economics 1997-1998* Henk Folmer y Tom Tietenberg (Eds.) Edward Elgar, 1997.

El sector forestal como potencial eje de desarrollo

OLMAN SEGURA

Los modelos de desarrollo que se han implementado en Costa Rica y en Centroamérica en general han percibido al recurso forestal como fuente de madera, obstáculo para la agricultura y tierra inculta; en síntesis, como un obstáculo para el desarrollo. Sin embargo, los tiempos han cambiado y ahora se percibe más claramente que los recursos naturales son la base fundamental de la economía y que además estos recursos no son ilimitados como se pensaba. En este sentido, un nuevo estilo de desarrollo para el país deberá estar basado tanto en la viabilidad económica, como en la social y en la ecológica de las actividades económicas.

Esta viabilidad ecológica, económica y social del uso de los recursos naturales, incluyendo al bosque, tiene su fundamento principal en la *visión global* que predomina en la sociedad. De acuerdo con la visión global dominante, la sociedad decide sobre los problemas ecológicos, económicos y sociales e influye fuertemente en las opciones para atenderlos y desde luego, esta "forma de ver" el mundo se refleja en el marco legal y en las instituciones de la sociedad, que al mismo tiempo influyen en las relaciones de los individuos, los precios y la rentabilidad de los distintos usos de la tierra.

¿Cómo lograr la modernización del sector forestal?

Sin pretender ser exhaustivo, se pueden enumerar algunas ideas sobre cómo se puede potenciar la *modernización del sector forestal*. Pero antes es importante apuntar que la modernización no significa "muerte a lo tradicional", sino su mejor aprovechamiento, la incorporación de ideas nuevas, lo mismo que la creación de mayor valor agregado, la creación de empleo y mejor calidad de vida. Para algunos, la modernización es úni-

camente sinónimo de liberalización de mercados, competencia y globalización; pero realmente no puede haber modernización sin descentralización, democratización y participación de los actores, ni puede haber modernización con exclusión de indígenas y campesinos.

Valorar adecuadamente los bienes y servicios del bosque.

Los bienes y servicios del bosque no están siendo valorados adecuadamente. Los beneficiarios actuales son los habitantes del país (región) y el mundo, como se puede apreciar en el cuadro 1; mientras los dueños del bosque sólo perciben una parte pequeña de lo que producen sus activos naturales, la parte relacionada con la producción de madera y algunos productos no maderables. Esta situación debe cambiar y debemos encontrar la forma de trasladar, aunque sea parcialmente, los beneficios que recibe "gratis" la sociedad a los propietarios del bosque.

Las negociaciones de canje de deuda por naturaleza a nivel internacional, captura, fijación y almacenamiento de dióxido de carbono y derechos de propiedad sobre la biodiversidad son algunas formas de aumentar el valor del bosque. Un campesino, empresario o el mismo Estado que recibe ingresos por estos conceptos posiblemente reconsiderará la opción de utilizar los árboles únicamente para madera o, peor aún, eliminarlos, ante la expectativa de ingresos de otras fuentes como las actividades agropecuarias tradicionales. Otros instrumentos económicos que se pueden introducir para aumentar el valor del bosque son los cánones de agua cobrados por el servicio de mantener constante en calidad y cantidad el ciclo hidrológico, o bien las entradas a parques nacionales públicos o privados. Desde luego debemos crear macro-políticas que permi-

tan que tales ingresos se conviertan en generación de empleo y desarrollo de la industrializa-

ción de bienes y servicios del bosque.

CUADRO 1
BENEFICIARIOS ACTUALES DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL BOSQUE

Bienes y servicios del bosque	Beneficios para el dueño del bosque.	Beneficios a nivel del país.	Beneficios a nivel global
1. Productos Maderables	X		
2. Productos No Maderables del bosque	X		
3. Mantenimiento del ciclo hidrológico		X	X
4. Conservación del suelo y de calidad de agua		X	
5. Control de vientos y ruidos		X	
6. Paisaje		X	X
7. Recreación y ecoturismo		X	
8. Servicios culturales y religiosos		X	
9. Regulación del microclima		X	
10. Combate del cambio climático		X	X
11. Mantenimiento de la diversidad biológica de los ecosistemas forestales		X	

Fuente: *Políticas Forestales en Centroamérica: restricciones para el desarrollo del sector* (1997) Segura, O.; Kaimowitz, D. y Rodríguez, J. (Eds) Edit. IICA, San Salvador, El Salvador.

Pagar los servicios ambientales no es un subsidio.

Los pagos por servicios ambientales no deben entenderse como subsidios o incentivos tradicionales, pues no lo son. En los casos en donde es el Estado el que debe pagar al dueño del bosque o los recursos naturales, esto debe ser consecuencia del cobro a terceras personas (nacionales o internacionales) por el beneficio obtenido. Los usuarios de servicios y los Gobiernos tampoco deben confundir estos montos con impuestos, pues no son una carga impositiva, sino el pago de un servicio, y por otro lado no son "recursos frescos" que ingresan al fisco a engrosar las arcas del estado y las posibilidades de aumentar el gasto público, sino que son transferencias para los "productores" de los servicios cobrados.

Una alternativa es que el Estado mismo invierta en prevenir un potencial impacto negativo en el ambiente, o bien asegurar la integridad de sistemas ecológicos, como respuesta a su obligación de velar por el bien común. Para el Gobierno, estos pagos deberían funcionar como un ingreso-egreso neutro, donde el que se beneficia paga al benefactor y el gobierno sirve como un simple facilitador. El reconocimiento y pago de los servicios ambientales servirán como un incentivo para que mayor número de productores consideren la posibilidad de mantener y aumentar las coberturas boscosas. En todo caso, el punto que se desea destacar aquí es la potencialidad de considerar al sector forestal, en el sentido amplio de la palabra, en el diseño de las políticas nacionales, incluyendo a los programas de ajuste.

Políticas participativas y democráticas

El diseño de la política debe ser participativo y democrático. La pequeña y la mediana propiedad rural, las mujeres, los indígenas y en general las clases marginadas deben participar activamente en el proceso. Igualmente se deben respetar las particularidades de cada país, región y organización. El acceso a la tierra, tanto al suelo como al vuelo forestal, son imprescindibles si se desea incluir realmente a las comunidades.

Se debe establecer una agenda forestal enmarcada en el sentir y pensar de los actores, vinculada con la problemática de las comunidades y nuevos roles de los actores, consistente con la utilización y valoración de los bosques. Las comunidades locales deben ser las responsables y gestoras del manejo, usufructo y conservación de los recursos naturales y forestales de su región. La meta es que las comunidades y el país puedan tener beneficio directo de los bosques, convirtiéndose el recurso forestal en una herramienta de desarrollo económico a nivel local y nacional.

Los principios de equidad, justicia y ética deben estar presentes en el proceso de participación comunitaria y social en general. Estos principios sólo podrán alcanzarse si se atacan restricciones enunciadas, tales como falta y/o ausencia de información oportuna, falta de poder político, falta de participación en la propiedad, discriminación étnica y subordinación de la mujer y falta de visión de largo plazo que incluya a las futuras generaciones.

Fortalecer la administración forestal mediante arreglos institucionales

Los servicios forestales, al igual que el sector público en general, han sufrido por los recortes presupuestarios y será prácticamente imposible fortalecerlos vía presupuesto regular. Por lo tanto, estos servicios se deberán fortalecer mediante negociaciones y alianzas innovadoras. Los Gobiernos locales en función de los acuerdos vinculados a su relación territorial-política pueden asumir un rol de coordinadores, diseñadores y ejecutores de las políticas. Bajo este instrumento se acercaría la planificación a las comunidades y la toma de decisiones sería más democrática.

Las ONGs, Universidades y otros grupos organizados podrían entrar en alianzas estratégicas que les permitieran beneficiarse de las áreas protegi-

das, sus zonas de amortiguamiento y en general de las áreas de conservación. El beneficio pasaría a ser mutuo si la sociedad civil internaliza en sus "políticas" y "cultura" la necesidad de proteger, conocer y usar cuidadosamente el bosque.

Trabajar conjuntamente con la cooperación internacional

Hace falta reorientar el soporte financiero que proviene de la cooperación internacional, especialmente la ayuda bilateral, y canalizarlo hacia las organizaciones de base de las comunidades adyacentes a los bosques y hacia la redefinición de las responsabilidades de los actores. La cooperación deberá en todo momento responder a las agendas de interés nacionales. El rol del gobierno sería de facilitador (generador de acuerdos con diferentes actores, monitorear los acuerdos, recopilar información, convocar) y las ONG y entes de educación superior vendrían a ser órganos de servicio (asesorías, consultorías, capacitadores, investigación).

La búsqueda de nichos para ingresar en nuevos mercados

Existe una enorme discusión sobre la incompatibilidad entre globalización y desarrollo sostenible. Sin embargo, a lo interno del sector forestal parecen existir "ventanas de oportunidad" para explotar con mayor rapidez y eficiencia los cambios institucionales y aprovechar la apertura de nichos comerciales internacionales. Para nadie es un secreto la posibilidad de certificación de la madera, de modo que se puedan acceder nichos crecientes de consumo, que a su vez reconozcan en los sobre-precios la característica de calidad de la madera. Contrario a lo que algunos argumentan de que éstos son pequeños espacios para el comercio internacional, es más bien argumentable que la demana es creciente y que los esfuerzos por introducir "nuevas" calidades de los productos le permitirá al sector tomar ventaja de su posición.

OLMAN SEGURA es profesor e investigador del Centro Internacional de Política Económica de la UNA. Las ideas presentadas en este artículo provienen de la investigación que culminó con el libro *Políticas Forestales en Centroamérica: restricciones para el desarrollo del sector* (1997) Segura, O.; Kaimowitz, D. y Rodríguez, J. (Eds) Edit. IICA, El Salvador.

La diversidad (biológica, cultural) convertida en la sal de la vida

EDUARDO MORA

Ambientalismo y élites ideológicas propugnan modelos de interacción social semejantes en su forma

Principalmente el ecologismo, pero también tenuemente las otras corrientes del movimiento ambientalista -del que el originario ecologismo es una vertiente-, propugnan un modelo de organización social que en varios de sus aspectos formales definitorios es consonante con el modelo de interacción social (incluyendo aquí las interacciones sociales internas de cada uno de los subsistemas que conforman la sociedad humana) promocionado en nuestra *era de información inmediática* por los poderosos organismos políticos y económicos supranacionales y las élites ideológicas que orientan los subsistemas sociales de la educación, la moral, el arte y las letras, el derecho y la política misma. Tales organismos e ideólogos de élite consideran que lo *políticamente* -e incluso *técnicamente*- deseable a fin de que la sociedad marche mejor en sus diversos aspectos, y de hecho lo cada día más dominante, es la comunicación permanente y multidireccional sin centros que administren y concentren la información, también las relaciones directas -sin mediaciones- entre los actores sociales, así como la organización en redes y no jerarquizada y la participación plural en todos los procesos de decisión. Consonantemente, el ecologismo desde su inicio, y ahora el ambientalismo aunque sin ahínco y no unánimemente, ha reivindicado la participación política directa de los ciudadanos, el trasvase de poder del Estado a aquéllos, la gestión de las unidades de producción económica de parte de las poblaciones locales y, más en general, la imperancia de economías a escala

humana regidas por los ciudadanos, y no al revés -todo esto en función de una relación más armónica con la naturaleza pero también por su valor en sí mismo- (MORA, 1996).

Ésta no es una convergencia de dos entidades autónomas: por un lado el ambientalismo, y por el otro, o bien la expansiva racionalidad de mercado -que impulsa una descentralización del poder y su dispersión en multitud de relaciones de mercado-, o bien la creciente y multiforme participación ciudadana (en el sentido débil del término, no como forma efectiva de democracia) a través de los expansivos sistemas de comunicación informatizada; sino que es un solo fenómeno. El ambientalismo es expresión y signo distintivo de esta época tanto como esta época es ambientalista (no ecologista), por lo que las entidades y fuerzas que marcan preeminentemente el carácter de esta época son -unas prácticamente y otras sólo retóricamente- ambientalistas, y, a su vez, el ambientalismo comparte muchas orientaciones de aquellas entidades y fuerzas.

Asimismo, tanto dentro del ambientalismo, movimiento social heterogéneo que es el de mayor influencia y más seguidores en esta época, como en los ámbitos educativo, moral, artístico y político de la sociedad contemporánea es común la heterodoxia en sustitución de la creencia, es reinante el mestizaje valorativo, normativo y conceptual, es constante la coexistencia de discursos de distintas raigambre y orientación. La diversidad no sólo es vista sin suspicacia, sino también es respetada e incluso considerada irreductible y muy valiosa. Y la tolerancia hacia lo diferente aumenta. Pero, aunque no se condena la desigualdad económica por considerársele resultado

del ejercicio de la libertad, sí tienden a ser condenados, en general, los desafíos a los principios de libertad e igualdad: la discriminación hacia mujeres, niños, disminuidos físicos, razas, credos y animales es denostada y tratada -ésta sí- con creciente intolerancia.

Y es que al ya no ser vivida la sociedad -ni la historia- como escenario de gestas, cruzadas y enormes peligros revolucionarios o contrarrevolucionarios, sino como un mercado bien surtido donde la libertad de escogencia y regateo es la norma, la intolerancia deviene oscurantista. El consenso fundamental de hecho existente en lo moral, en lo legal y en lo político en torno a principios o nociones como tolerancia, igualdad y democracia es precisamente lo que permite tolerar cómodamente la disidencia, o intolerarla moderadamente, dado que no es percibida como riesgo (intolerancias como la que, por ejemplo, se *profesa* hacia el modelo político disidente existente en Cuba, son rescoldos de la Guerra fría o de otras guerras de las que grupos sociales oscurantistas se aferran en su miseria psíquica como de clavos ardientes).

Exaltación de la diversidad biótica y cultural

La diversidad de grupos, enfoques y procedimientos dentro del movimiento social ambientalista es tan consustancial y definitoria de él como la defensa y la centralidad de la biodiversidad en el ideario de ese mismo movimiento. Para éste, las especies vivas en su variabilidad y complementación son tan respetables y necesarias de cara al equilibrio ecosistémico y de la biosfera en general como para la contemporánea ideología punta -cuya dominación es creciente- lo son las culturas de cara a la armonía de la especie humana. Esta orientación, central y definitoria de la presente época -aunque ensombrecida para muchos por su choque con ciertas fuerzas sociales declinantes pero belicosas (v.g. racistas) que se hacen notar espectacularmente en los medios de comunicación- dice que debe respetarse la especificidad de cada cultura, que a éstas no debe agrupárseles en jerarquías: no hay superiores ni inferiores porque no hay una línea de progreso de la humanidad en su conjunto; cada una tiene derecho a la existencia de acuerdo a sus propias regularidades -al igual que lo tiene cada ecosistema y cada especie según los ambienta-

listas-. La riqueza humana, dice, reside enormemente en la diversidad y complejidad cultural, entendido esto no como la alta cota de progreso o desarrollo de una u otra de las culturas particulares sino como el mosaico o entramado -a veces más potencial que factual- que todas conforman (FINKIELKRAUT). Así como los ambientalistas consideran la biodiversidad una riqueza por la mera diferenciación de especies, genes y ecosistemas de que es sinónimo y por las complicadísimas relaciones internas que en éstos últimos se establecen a través de los flujos energéticos entre los diferentes elementos vivos -y abióticos- que los conforman a ellos y a la biosfera, así las élites del arte y las letras, de la educación, de la moral, del derecho y de la política consideran la diversidad cultural: como una riqueza residente en los diversísimos modos que tiene la especie humana de estructurar y conducir su vida en el planeta y residente también en los productos de los hibridajes culturales: los contactos y las mezclas son fuente de mejores adaptaciones al medio y al cambio y de más variabilidad y opciones de vida social que estimulan la inteligencia, la imaginación y la sensibilidad humanas.

De similar manera que los ambientalistas no propician que especies biológicas propias de un ecosistema se establezcan en otro extraño, pero lejos de menospreciarlas alientan su existencia, así también las élites mencionadas aplauden y admiran la existencia de culturas exóticas, aunque sin invitar a los individuos pertenecientes a ellas a trasladarse a los países de origen de tales élites. Pero éstas, al igual que los ambientalistas, una vez establecidos -por cualesquiera razones- los individuos exóticos -no humanos o humanos- en el otro ecosistema o cultura, piden respeto hacia ellos: ya adaptados son bienvenidos, porque entonces su presencia se vuelve enriquecimiento del ecosistema o cultura. Y aun más allá de esto, las élites ideológicas y los sectores sociales más próximos a ellas en los países del norte valoran altamente e importan productos culturales de sociedades primitivas y preindustriales, y los imbrican o integran orgánicamente a su propia cultura (gastronomía, artes, credos, filosofías, ciertas normas de comportamiento, ornamentación doméstica: mascotas vegetales y

animales incluídas), que obviamente no pierde su papel dominante.

Para el ambientalismo, nacido y más fuerte en el norte del planeta, son especialmente valiosos los exóticos ecosistemas tropicales, silvestres aún en enorme proporción, de muy alta biodiversidad y, por cierto, sede todavía de pueblos primitivos, lo cual les añade atractivo. Estamos desfavorecidos en todo pero en esto nuestra ventaja es mayúscula y, entonces, el ecoturismo, practicado por una clase media metropolitana educada que apetece naturaleza silvestre y muy biodiversa y culturas primitivas con cuyo contacto se experimenta lo que es la diversidad humana, ha devenido uno de los principales fenómenos económicos que apuntalan nuestras economías y que, en el mismo movimiento, apuntalan -y modifican- nuestra precaria autoestima. Otro fenómeno hermano de éste que resulta asimismo benéfico económica y anímicamente es el de captación de donaciones dinerarias foráneas para la protección de nuestros ecosistemas. También se ha empezado a practicar, desde hace muy poco pero de modo creciente, la venta de servicios ambientales: a través del manejo y conservación del recurso forestal, de parte nuestra, se fija el carbono generado por las economías altamente industriales, lo que, sobre la base de un contrato, consecuenta el pago a nosotros por parte de ellas; está en vías de implementación la venta de otros servicios. Y, finalmente pero no menos importante, están los nacientes acuerdos comerciales, inicialmente entre el Inbio y compañías extranjeras, para que éstas exploten ciertos novedosísimos recursos naturales (la novedad reside en que ciertos elementos de la naturaleza no son explotados en tanto *entidades* materiales -como los recursos naturales clásicos- sino que lo que es explotada es su *identidad* -estructuras moleculares; genes extraídos (MORA, 1997)) para la producción de bienes como medicamentos, pesticidas de uso agrícola, especies animales o vegetales mejoradas, etcétera; este negocio, a partir del que el Estado puede ingresar importantes sumas de dinero para protección de la naturaleza, consiste en, empezando con labores de bioprospección, descubrir en plantas, animales, microorganismos u hongos de nuestros bosques, estructuras bioquímicas o genes con propiedades que permitan producir a partir de ellos mercan-

cías (ya mencionadas) nuevas en cuanto a su uso o menos costosas, o más efectivas, que otras similares ya existentes en el mercado.

O sea, en el mundo globalizado somos ya no sólo productores de bienes agrícolas y de otros industriales aquí elaborados con tecnologías extranjeras, sino también y ascendentemente somos productores o, mejor dicho, poseedores y guardianes de pujantes ecosistemas duros de ser domeñados a pesar de su fragilidad, somos jardineros del agreste y posmoderno jardín que ahora necesitan para sobrevivir las ricas sociedades herederas del iluminismo -de la vieja alianza entre ciencia y progreso socioeconómico, el peligroso jardín con culturas exóticas contenidas que ahora quieren degustar las ricas sociedades herederas del romanticismo.

El auge de lo silvestre/primitivo/exótico

No es sólo, pues, un interés estratégico de la sociedad contemporánea el que subyace a la protección de lo silvestre. Los ideólogos y élites de ella valoran altamente lo que, con laxitud, sienten y conceptúan como silvestre/ primitivo/ exótico, prueba de lo cual vendría a ser, no ya la protección estrictamente ecosistémica, que podría obedecer nada más que a la procura de su mezquino provecho, sino la exaltación y protección de los pueblos indígenas neolíticos. Exaltación y protección que pueden verse expresados en la inserción de ciertos contenidos en los planes de estudio dentro de la educación formal, en legislación pertinente, en nuevos renglones presupuestarios estatales y de organismos supranacionales, en otros actos menos tangibles y más dispersos y, como está dicho, en los nuevos valores y conceptos que vertebran todo ello.

Seguramente esto no expresa que haya muerto el etnocentrismo ni que haya periclitado lo que atropelladamente podría llamarse productivocentrismo -o sea, la consideración de la producción económica como motor del bienestar humano- en favor de la consideración de que la armonía con la naturaleza -y entre los humanos- constituya tal motor. Lo que sucede es que la razón y las ciencias permiten evaluar bien la importancia del equilibrio ecosistémico y, parejamente, dentro de una suerte de neorromanticismo y de cierto agotamiento de la razón ilustrada que se vive ahora (no obstante lo recién

dicho), se hace posible admirar lo primitivo y agreste perdiéndoles el miedo y, en general, viabilizándose una gran tolerancia por lo diferente - sin que lo propio se deje diluir en lo diferente-.

Acaso este amor y este respeto por lo agreste/primitivo/exótico, esta negación de la superioridad de una cultura sobre otra, la afirmación de la particularidad irreductible de cada una y de su complementariedad y enriquecimiento recíproco sea una síntesis (aunque endeble) del iluminismo del siglo XVIII y del romanticismo que casi inmediatamente surgió como reacción a aquél. Sin que esto niegue que, dejadas a merced de la racionalidad del mercado, las naciones o sociedades acaben relacionándose de manera que unas resultan superiores a otras, avasallándolas y menospreciándolas, al igual que acontece en la sociedad moderna donde todos los humanos son, por naturaleza, moral y legalmente iguales, no obstante lo cual unos explotan y humillan continuamente a otros, y como asimismo sucede con los ecosistemas y sus componentes: se les aprecia crecientemente pero se les sigue machacando a golpes de productivismo.

Y es que, efectivamente, ya no goza de legitimidad ensalzar *la* cultura: la de las grandes obras científicas, tecnológicas, artísticas, políticas, etcétera, y desdeñar la *incultura*: lo precientífico, lo preindustrial, lo que obedece, en general, a normas premodernas y no clásicas (FINKIELKRAUT). Como tampoco es ya válido convocar a empresas para el progreso económico o social sin asegurar fehacientemente que las consecuencias sobre natura serán inocuas o benignas. Se encomian las manifestaciones de la (aún por algunos llamada) *incultura* -v.g. ciertas músicas, ciertas terapias, ciertas creencias místicas, ciertas prácticas económicas de pueblos "atrasados"- confiriéndoles el mismo estatuto

que ostentan las grandes obras consagradas en la cultura moderna; y se elogian y respetan, asignándoles ese mismo estatuto, ciertas manifestaciones *subculturales* -como el movimiento rock, el *new age* o el naturismo- dadas en el seno de las sociedades modernas que desafían los cánones de belleza, científicidad o eficiencia tecnológica de éstas. Se glorifica también la naturaleza salvaje, incluso esa que devora a quienes osan penetrarla, sean hombres extraviados o ejércitos, no sabiéndose al final si fueron plantas, animales o caníbales los que limpiaron la selva de aquellos intrusos, siendo pues lo alabado, a la larga, uno solo: lo agreste/primitivo/exótico.

En la base de este giro ideológico de las sociedades contemporáneas inescamoteablemente está (no como causa) el desarrollo y popularización de la antropología y la ecología de los años 50 y 60 de este siglo -respectiva y aproximadamente-. La antropología insistió mucho, entonces, en la desjerarquización de las culturas negando *una* línea de progreso común a ellas; y la ecología pulió y relanzó la idea de la insustituibilidad del lugar y la función de cada uno de los elementos constitutivos de cada ecosistema dentro de éste, y también de los ecosistemas dentro de la biosfera, en la que el ser humano es sólo un elemento más.

Referencias

Mora, Eduardo. 1996. "La indiferencia ambientalista frente a la potenciación del mercado". En *Ambien-tico* n° 42, julio 1996. Costa Rica.

----- 1997. "El concepto *recurso natural* en el discurso sobre biodiversidad". En *Ambien-tico* n° 54, setiembre 1997. Costa Rica.

Finkelkraut, Alain. 1987. *La derrota del pensamiento*. Editorial Anagrama. España.